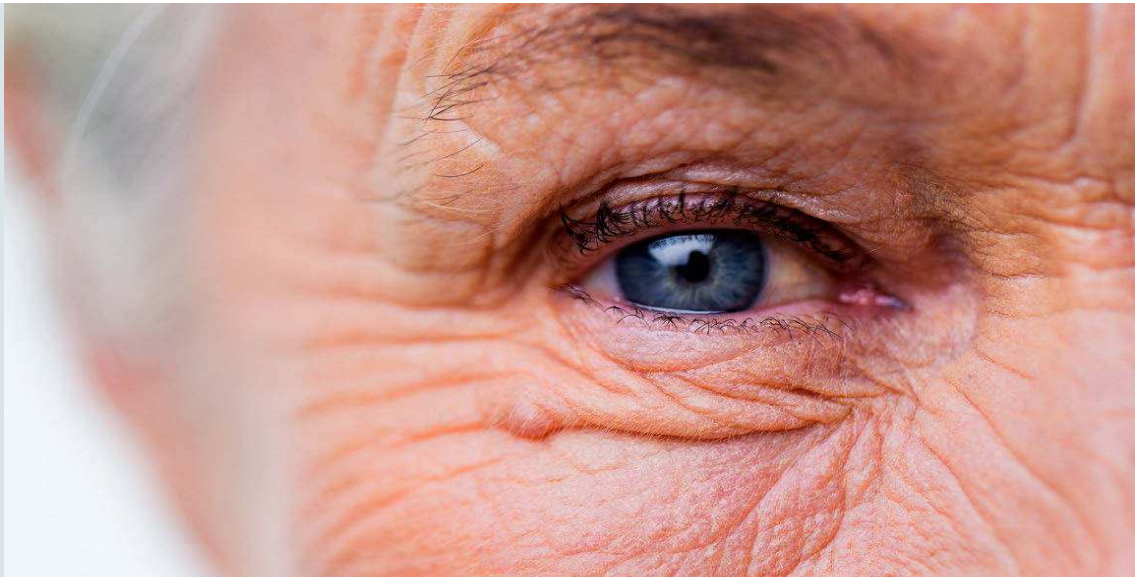


MEDIA

El País Vasco (1.363,5 euros) registra las prestaciones más altas seguido de Asturias (1.338,9) y Madrid (1.299,5). En el otro extremo están Murcia (976,9), Galicia (923,7) y Extremadura (912,2). Por género, la media de los españoles es de 1.175,8, frente a los 754,8 de las españolas. Los trabajadores del régimen general cobran 1.249,2 y los autónomos 738,5. / SYDA PRODUCTIONS



JUBILACIÓN

Objetivo: dar con la ecuación que salve el futuro de las pensiones

El BE avisa de que el gasto aumentará 22.000 millones de euros en 2030 si las prestaciones pasan a actualizarse según el IPC. El 28% de los españoles ya invierte en planes privados de ahorro

Nuestro país sigue sin ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el modelo público de pensiones. El Banco de España advirtió hace unos días de que mutilar la reforma de 2013 y volver a vincular las actualizaciones de las prestaciones al IPC tendrá un elevado coste para la Seguridad Social: 22.000 millones de euros adicionales de gasto en 2030 y unos 40.000 millones en 2050.

La solvencia financiera del modelo español, basado en el reparto (las aportaciones de los trabajadores cotizantes pagan las prestaciones de los jubilados), parece no dar más de sí. Desde hace tiempo, el número de trabajadores no cubre las necesidades de la Seguridad Social. De ahí que el Fondo de Reserva ya esté en déficit, y que las dos pagas extras de las pensiones se carguen a los presupuestos Generales del Estado.

«Nos encontramos con una población envejecida, donde la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer frente al reemplazo generacional, que sería de 2,1. El sistema depende en gran medida de la tasa de actividad y productividad del país y de los salarios existentes, los cuales se han devaluado desde 2012», explica Jesús Pérez, experto en planificación

financiera, seguros y pensiones y profesor del IEB.

Así, el gasto en pensiones supone el 40% de los presupuestos, una cifra que sube una media de 5.000 millones de euros al año: en la actualidad, 9,6 millones de pensionistas -la cifra podría alcanzar los 14 millones en 15 años- son sufragados por 18,9 millones de cotizantes. Según los cálculos, para poder hablar de un sistema viable, se necesitarían, en la actualidad, 21 millones de trabajadores, lo que supondría tener que aumentar el número actual en dos millones. «Para ello, la economía debería seguir creciendo al 3% durante al menos cuatro años más, lo cual parece muy poco probable», alega Carlos Martínez, presidente de IMF Business School.

A esto hay que añadir que el importe de la pensión media pública de jubilación se ha incrementado en las últimas décadas, situándose en 1.074,83 euros al mes en 2018, según datos de la Seguridad Social. Además, la tasa de sustitución (lo que representa la pensión respecto del último salario) es del 82% frente al 63% de la OCDE. «Las pensiones públicas son generosas, pero los salarios son menores en nuestro país que en otros vecinos de la UE», dice Pérez.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a partir de 2021, se pro-

Europa renueva sus aportaciones de forma automática

En países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Suecia y Holanda las pensiones se actualizan según los salarios o la evolución del coste de la vida. Además, tienen una cultura de ahorro complementaria a sus sistemas públicos. Por su parte, en los países anglosajones las aportaciones del Estado son mínimas, y es el ciudadano quien debe generar su propia hucha. «De ahí la gran importancia que tienen en estas naciones los sectores de gestión de las inversiones a largo plazo y el asegurador, que al mismo tiempo activa la economía al invertir los ahorros en industrias productivas a través de instrumentos financieros como acciones, bonos, fondos de inversión, fondos de pensiones...», afirma Jesús Pérez, profesor del IEB.

duce la gran salida de los baby boomers hacia la jubilación. «Serán las pensiones más altas de la historia, porque han sido los mayores salarios y, por tanto, las mayores cotizaciones realizadas», cuenta Pérez.

Las fórmulas para resolver este entuerto son tan finitas como imposibles: la prolongación de la vida laboral, el incremento de las bases de cotización para recaudar más, incentivar la puesta en marcha de planes de pensiones por parte de las empresas o apostar por un sistema privado. «Con una de las tasas de ahorro más bajas de la UE y en mínimos históricos, esta no parece una situación muy realista», opina Martínez.

Así, ¿cómo garantizar la sostenibilidad del sistema contributivo? La ecuación cambia dependiendo de la tasa de la sustitución que busque el ciudadano. Las estimaciones apuntan a que esta se reducirá hasta el 55% respecto al salario medio final, salvo que la tendencia cambie. «Si una persona quiere jubilarse con una pensión superior deberá realizar un esfuerzo de ahorro privado durante su vida laboral», defiende Pérez.

El principal problema es la falta de capacidad para ahorrar que su-

fren muchos españoles. Según la Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía), de 2015 a 2018 el ahorro privado para la jubilación ha perdido 390.000 participantes. Sólo un 28% de los españoles invierte en planes de pensiones privados, a pesar de que el 75% no cree que el sistema actual pueda garantizar su salida del mercado laboral. La adquisición inmobiliaria se lleva la palma: «En los países del norte de Europa los ciudadanos destinan el 85% de su ahorro a negocios mobiliarios y el 15% a inmobiliarios. En España es a la inversa», desvela Pérez.

El patrimonio acumulado por las opciones privadas de ahorro para la jubilación creció un 5,5% en 2017 y superó los 74.300 millones de euros, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Además, la tendencia de asumir cada vez

Los productos garantizados y de renta fija retroceden un 53% frente a los mixtos y variables, que suben un 67%

más riesgos se ha mantenido este año, a pesar de las turbulencias de los mercados financieros. Los productos conservadores (planes garantizados y de renta fija) han retrocedido un 53%, mientras que los mixtos y variables han avanzado un 67% gracias a los bajos tipos de interés.

«Lo ideal sería que los gobiernos anunciaran medidas que favorezcan el tratamiento fiscal de las inversiones en planes privados con el objetivo de complementar la prestación pública», explica Martínez. «Existe un factor cultural importante. Un joven de 25 años ni siquiera se plantea cuál será su situación económica tras 40 años de trabajo», añade.